



Proceso	Verbal responsabilidad civil extracontractual
Demandante	Cristian Alberto Díaz Vega y/os
Demandado	David Alejandro Castro Gil y/os
Radicado	05001 31 03 008 2023 00104 01
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Auto No 046
Decisión	Revoca
Tema	Excesivo ritualismo al admitir demanda
	<p>El a quo inadmitió la demanda exigiendo indicar “<i>el parámetro jurisprudencial máximo en que basa la cuantificación del daño extramatrimonial solicitado en la demanda, para casos similares, de conformidad con lo ordenado en el artículo 25, inciso final y artículo 82 numeral 8° del Código General del Proceso</i>”.</p> <p>Desde ya se advierte que el legislador nunca tuvo la intención de crear una exigencia diferente de las señaladas en el artículo 90 del C. General del Proceso. Simplemente, como se advertía en la comisión redactora en las sesiones de socialización del proyecto de código, se había hecho costumbre que frente a los daños extrapatrimoniales los litigantes señalaran sumas exorbitantes con la finalidad de tener eventualmente al alcance, no solo la doble instancia, sino también el recurso extraordinario casación.</p> <p>3. Corresponde entonces al juez motivar la falta de competencia por el desconocimiento de esos parámetros jurisprudenciales, pero no trasladar la carga a los actores, de tal manera que la providencia inadmisoria y el posterior rechazo no es más que manifestación de la clásica contradicción entre la aplicación de la ley de manera estricta, el formalismo por llamarlo de alguna manera y la prevalencia de derechos sustanciales, de la realidad sobre la forma, el antiformalismo, tal y como lo sostuvo este Magistrado en época pretérita, y no se trata de un asunto que haya tenido venero en el artículo 228 de la Constitución como suele creerse.</p>

TRIBUNAL SUPERIOR

2023-051

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante frente al auto del 18 de abril del año en curso, mediante el cual se rechazó la demanda por no haberse subsanado las exigencias del auto inadmisorio.

I. ANTECEDENTES

1. Correspondió por reparto al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, demanda verbal de responsabilidad civil extracontractual instaurada por Cristian Alberto Díaz Vega, Yuliana Rendón Gómez, quienes actúan en nombre propio y como representantes de su hijo menor Maximiliano Díaz Rendón; María Olga Vargas León, Dainer Gómez Vargas, en su propio nombre y en representación de su hija María José Gómez Arango en contra de David Alejandro Castro Gil y Milena María Muñoz Espinosa.

2. Providencia del 4 de octubre último se inadmitió el libelo exigiendo, entre otros la indicación del “..*parámetro jurisprudencial máximo en que basa la cuantificación del daño extramatrimonial solicitado en la demanda, para casos similares, de conformidad*

con lo ordenado en el artículo 25, inciso final y artículo 82 numeral 8° del CGP” .

3. El mandatario judicial de la parte demandante allegó escrito aduciendo subsanar uno a uno los requisitos pedidos, pero el *a quo* consideró que los parámetros jurisprudenciales citados no correspondían para el caso en concreto, por lo que no se habían subsanado en debida forma los requisitos y rechazó la demanda. (Archivos 4 y 5)

4. Inconforme con la decisión el apoderado de los actores interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación citando al Despacho cuales eran las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de Tribunales de Distrito en las que se apoyaba para formular la pretensión de reconocimiento y pago de perjuicios extrapatrimoniales, con lo cual se llenaba el requisito exigido.

Que la decisión tomada es incorrecta y se alejaba de lo dispuesto en el artículo 90 del C. General del Proceso, a más de que el artículo 25 ib. refiere solamente a mencionar los parámetros jurisprudenciales en los que se apoya el demandante para efectos de determinar la cuantía del proceso, y no exige que se argumente la razón por la cual considera que las providencias mencionadas son aplicables al caso concreto, por lo que se está imponiendo una exigencia que no está contemplada en las normas citadas, desconociéndose con ello el derecho de acción y de acceso a la administración de justicia.

5. Por auto del 9 de junio pasado, el juzgado de conocimiento no repuso su decisión, por considerar que la interpretación armónica

de los artículos 25 y 82 numeral 9 del permite concluir que la indicación de los parámetros enunciados es un requisito formal, cuya ausencia da lugar a la inadmisión y posterior rechazo de la demanda, y no un aspecto de derecho que deba conocer el juzgador, siendo carga del actor la fijación de la cuantía

“En el asunto objeto a estudio, de los hechos y las pretensiones de la demanda, en las pretensiones se fijan unos montos de perjuicios extrapatrimoniales para cada una de las víctimas (directas e indirectas) sin aclarar por qué se establecen así, de dónde se saca la indemnización de perjuicios inmateriales (perjuicios morales y daño a la vida de relación) en cuantía total de \$ 400.000.000.oo.

“Todo lo anterior deja entrever, que no se ofrece información jurisprudencial de la que se pueda derivar que la tasación de perjuicios extra patrimoniales en esa cuantía y por hechos similares, haya sido avalada, por así decirlo, por la Corte Suprema de Justicia; lo que también conlleva a que no se pueda determinar la competencia para conocer del asunto, por el factor cuantía de la demanda”. (Archivo 7, negrillas del texto)

Concedida la impugnación vertical, el expediente fue remitido a la Corporación, la que decide lo pertinente, previas las siguientes

II. CONSIDERACIONES

1. En lo que respecta a los motivos por los cuales el juez rechazó la demanda referida, al concluir que no se había dado cumplimiento a las exigencias pedidas, resalta el Tribunal que la iniciación del proceso civil, en virtud del derecho de acción, se realiza a través de la demanda, como instrumento previsto por la ley para garantizar, con el cumplimiento de los requisitos señalados en ella, que el proceso podrá adelantarse sin que culmine luego, por ineptitud de esta con una sentencia inhibitoria. Es por ello, que la demanda debe ajustarse a determinados

requisitos establecidos de manera general en el artículo 82 del Código General del Proceso, y específicamente para algunos tipos de procesos en el artículo 83 ibídem.

La exigencia de estos requisitos encuentra su razón de ser, al considerarse que la demanda es un acto de postulación, a través del cual la persona que la impetra, ejercita un derecho frente al Estado, pone en funcionamiento el aparato judicial y propicia, la iniciación de una relación procesal.

En consecuencia, si la demanda cumple con las formalidades que la ley establece, deberá ser aceptada, de lo contrario será inadmitida para que sea subsanada dentro del término de cinco (5) días o ser rechazada, tal y como lo prevé el artículo 90 ib., pues el rechazo de la demanda impone al juez la obligación de verificar si las formalidades previstas por el legislador han sido satisfechas al momento de ejercer el derecho de acción.

2. Luego, la norma es clara al señalar que “*sólo en los eventos enumerados procede la inadmisión*”, es decir, que las causales son de naturaleza restrictiva, pues lo que quiso reiterar el legislador con el nuevo estatuto procesal, fue garantizar la tutela judicial efectiva, esto es, que el ciudadano pudiera acudir ante la jurisdicción, sin ninguna traba, en procurar de la resolución de los conflictos intersubjetivos de intereses.

El a quo inadmitió la demanda exigiendo indicar “*el parámetro jurisprudencial máximo en que basa la cuantificación del daño extramatrimonial solicitado en la demanda, para casos similares,*

de conformidad con lo ordenado en el artículo 25, inciso final y artículo 82 numeral 8° del Código General del Proceso”.

Desde ya se advierte que el legislador nunca tuvo la intención de crear una exigencia diferente de las señaladas en el artículo 90 del C. General del Proceso. Simplemente, como se advertía en la comisión redactora en las sesiones de socialización del proyecto de código, se había hecho costumbre que frente a los daños extrapatrimoniales los litigantes señalaran sumas exorbitantes con la finalidad de tener eventualmente al alcance, no solo la doble instancia, sino también el recurso extraordinario casación.

3. Corresponde entonces al juez motivar la falta de competencia por el desconocimiento de esos parámetros jurisprudenciales, pero no trasladar la carga a los actores, de tal manera que la providencia inadmisoria y el posterior rechazo no es más que manifestación de la clásica contradicción entre la aplicación de la ley de manera estricta, el formalismo por llamarlo de alguna manera y la prevalencia de derechos sustanciales, de la realidad sobre la forma, el antiformalismo, tal y como lo sostuvo este Magistrado en época pretérita¹, y no se trata de un asunto que haya tenido venero en el artículo 228 de la Constitución como suele creerse.

En efecto, el artículo 472 de la ley 105 de 1931, más conocido como Código Judicial, sabiamente consagraba:

“Los funcionarios del orden judicial, al proferir sus decisiones, deben tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la

¹ Aclaración de voto. Nro 5. Medellín, 13 de abril de 2007. Ordinario de GASPAR ALEMANY FERRER contra BEATRIZ ELENA y MARISOL PARRA CARDONA. M.P. MARÍA E. PUERTA M. Rdo. 05360 31 002 2004 00187 01

efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, y por consiguiente, con este criterio han de interpretarse las disposiciones procedimentales y las relativas a las pruebas de los hechos que se aduzcan como fundamento del derecho”.

En vigencia de esta disposición, la Corte Suprema de Justicia en los años 1937 y 1938, sí, aquella que produjo en el país un giro antiformalista, profiriendo sentencias que dinamizaron la estática de la norma escrita y cuyas decisiones más relevantes fueron incluso la génesis de nuevas normas jurídicas, se expresó así:

“Como el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la leyes sustantivas, según lo enseña el art. 472 del C.J., con este criterio no solo han de interpretarse las normas procesales y probatorias conforme lo prescribe tal artículo, sino que también las súplicas del demandante y las defensas del demandado. Conocida claramente la intención de los litigantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Los jueces han de buscar el verdadero sentido de las pretensiones expuestas por las partes, aunque tengan que desatender el tenor literal de aquellas piezas cuando traicionan la intención inequívoca de quienes litigan. Si no fuera así, un peligroso criterio textualista sacrificaría el espíritu a la letra y el derecho a la fórmula” (Cas. 18 de noviembre de 1937, XLV,844; 16 de noviembre 1951, LXX,795) – subrayas intencionales -.

4. El legislador de 1970 no olvidó tan sabia directriz del C. Judicial, de ahí el contenido del artículo 4º del decreto 1400, Código de Procedimiento Civil y nuevamente plasmado por el Constituyente en el artículo 228 de la Carta Política, que si bien no tiene la entidad suficiente de eliminar la requisitoria mínima de los escritos mediante los cuales se acude a los tribunales, la que se cumple una vez se acató la exigencia inadmisoria, como se verá a continuación, sin que sobre señalar que el artículo 11 del C. General del proceso, insiste en que: *“Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los*

procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.”.

5. En conclusión, como dijo la Corte Constitucional en Sentencia C-833 de 2002 “...*tampoco puede decirse que el juez que tiene a su conocimiento la demanda, puede inadmitirla bajo criterios puramente subjetivos, pues las causales de inadmisión son taxativas, se encuentran específicamente señalas en el precepto demandado y no le es posible a un juez inadmitir una demanda, sin que el auto que ordena la inadmisión sea debidamente fundamentado, tan es así que fue el propio legislador quien en su obligación de ejecutar el mandato social, contenido en la Constitución, estableció para los funcionarios judiciales el deber de respetar, garantizar y salvaguardar los derechos de quienes intervienen en el proceso (artículo 9 ley 270 de 1996)”*

6. En consecuencia, proceder de la forma como lo hizo el *a quo*, es olvidar la esencia de los procedimientos, pero además, claro ejemplo del adagio latino “*summus jus, summa injuria*”, pues de esa manera se lesionó el derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes, se itera, el respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en sí mismos, todo lo contrario, la primacía de lo sustancial, impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administración de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella.

En este orden de ideas, se REVOCARÁ el auto impugnado y en su lugar se dispondrá que el *a quo* proceda a proferir el auto que

corresponda haciendo abstracción de los argumentos contenidos en el auto recurrido.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, REVOCA el proveído objeto de apelación por las razones que fueron expuestas en la parte motiva de esta providencia y en su lugar dispone, que la *a quo* proceda a proferir el auto que corresponda haciendo abstracción de los argumentos contenidos en el auto recurrido.

NOTIFIQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado

Firmado Por:
Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fc2f128ef4a15d5ce9465237b1746678082c7792c671e7c08df7e38afb952ed7**
Documento generado en 21/07/2023 02:53:08 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>